

Repertorios insurgentes en Argentina contemporánea

Javier Auyero*

Durante los años 90, nuevas y poco convencionales formas de beligerancia popular transformaron a la Argentina en un verdadero paisaje de insurgencia colectiva y, parecería ser que, a partir de los eventos de diciembre del año 2001, este ciclo de acción colectiva aún no ha terminado. Durante la última década, tomas y ataques a edificios públicos (casas de gobierno provincial, legislaturas, sedes de gobiernos municipales, tribunales), barricadas en rutas nacionales y provinciales y campamentos en plazas centrales, se han generalizado y han aumentado en su frecuencia en el sur, centro y norte del país. Los episodios que se exponen a continuación, quizás sean los que mejor ilustren la dinámica y el carácter de la acción colectiva insurgente en la Argentina contemporánea.

El *santiagazo*

El 16 de diciembre de 1993, tres edificios públicos -la casa de gobierno, los tribunales, y la legislatura- y una docena de residencias privadas de políticos y funcionarios locales fueron invadidos, saqueados e incendiados por cientos de habitantes Santiago del Estero: em-

pleados estatales y municipales, maestras, jubilados, estudiantes, dirigentes sindicales entre otros, reclamaban el pago de sus salarios, jubilaciones y pensiones (adeudados desde hacía tres meses), protestaban contra la implementación de políticas de ajuste estructural y la generalizada corrupción gubernamental. Conocido como el *santiagazo*, este episodio tiene características singulares, se lo considera una rebelión de gente “hambrienta e indignada” (como la describió buena parte de la prensa nacional) que convergió en las residencias particulares de funcionarios y en los símbolos del poder público; prácticamente ningún comercio fue asaltado, ni se conocen víctimas fatales.

La *pueblada*

En junio de 1996, miles de habitantes de las localidades vecinas de Cutral-co y Plaza Huincol (provincia de Neuquén) bloquearon las rutas de acceso al área durante 7 días y 6 noches. Los *piqueteros*, como se denominaron los manifestantes en las barricadas, reclamaban “fuentes de empleo genuinas”, rechazaban la intervención de las autoridades democráticas y de otros políticos locales (los acusaban de “falta de honestidad” y “arreglos poco claros”) y demandaban la presencia del Gobernador para discutir sus reclamos. La impresionante cantidad de manifestantes (20.000, según la mayoría de las fuentes) hi-

* Departamento de Sociología, State University of New York at Stony Brook. CECYP -Centro de Estudios en Cultura y Política-. Fundación del Sur, Buenos Aires.

zo retroceder a las tropas de la Gendarmería Nacional (enviadas por el Gobierno Nacional). El 26 de junio, el gobernador Sapag accedió a cada una de las demandas en un acuerdo firmado con la recientemente formada Comisión de Piqueteros. La *pueblada* constituye también otro evento extraordinario en la Argentina democrática: las tropas retrocedieron en aparente derrota, y las autoridades cedieron (formalmente, al menos) a las demandas populares.

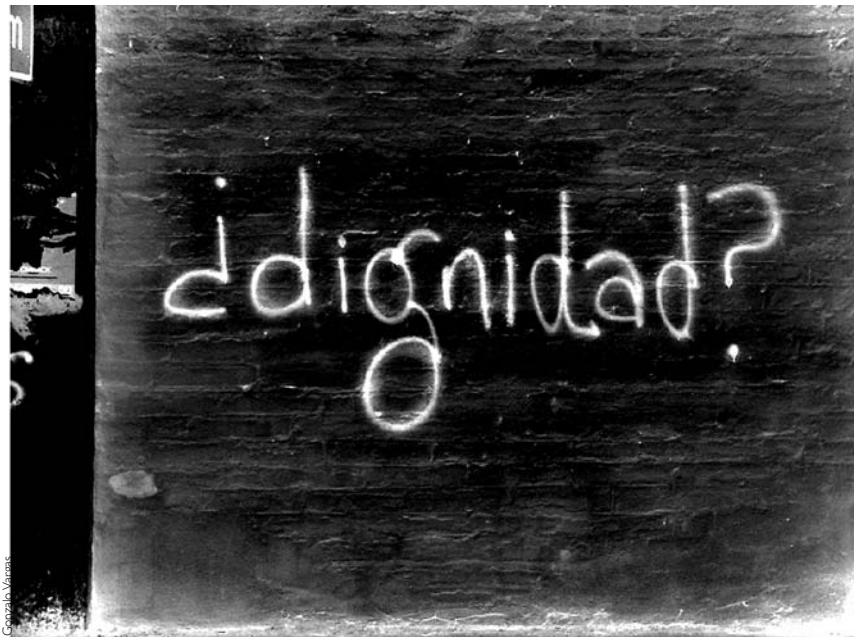
La Plaza del aguante correntino

Entre el 7 de junio y el 17 de diciembre, miles de correntinos acamparon en la plaza principal de la capital de la provincia. Placeros, maestras, empleados estatales, judiciales, abogados, entre otros manifestantes, reclamaban sus salarios impagos (con atrasos de entre 2 y 5 meses), se oponían a los despidos en la administración pública y protestaban contra la generalizada corrupción de los gobiernos provinciales y municipales. Los manifestantes comían y dormían en la plaza, organizaban marchas y demostraciones, además de varios cortes de ruta en el puente General Belgrano, que une a las ciudades de Corrientes y Resistencia. Estos seis beligerantes meses se conocieron como el *correntinazo*; ninguna otra protesta en la Argentina contemporánea duró tanto tiempo.

El *santiagazo*, la *pueblada* y el *correntinazo* fueron, sin duda, episodios extraordinarios, pero difícilmente aislados. Son parte de un ciclo de beligerancia cuyas raíces estructurales, modalidades y sentidos son el objeto de este trabajo.

Repertorios de la beligerancia

La teoría de “repertorio de acción colectiva” elaborada por Charles Tilly (1986, 1992, 1995) y su análisis de las transformaciones estructurales en la raíz de los cambios en la beligerancia popular, nos ofrecen una poderosa



herramienta para diagnosticar la mutación de los medios y los significados de la lucha popular en la Argentina contemporánea. El concepto se refiere a “un conjunto limitado de rutinas que son aprendidas, compartidas y ejercitadas mediante un proceso de selección relativamente deliberado”, y nos invita a examinar las regularidades en las maneras de actuar colectivamente en defensa o prosecución de intereses compartidos a lo largo del tiempo y del espacio.

En primer lugar, Tilly nos ofrece un modelo que articula diferentes niveles de análisis, desde cambios macro estructurales como el desarrollo del capitalismo (con la consiguiente proletarianización del trabajo) y los procesos de conformación del Estado (con el crecimiento paralelo de la complejidad y penetración de su poder extractivo y coercitivo) hasta regularidades en las interacciones entre estados y ciudadanos. Este modelo nos exhorta a mantener conceptualmente juntos macro estructuras y micro procesos y a mirar de cerca los modos en que las grandes transformaciones dan forma a la acción colectiva *de manera indirecta* al afectar intereses, oportunidades, organizaciones e identidades de la gente común. El modelo enfatiza, al mismo tiempo, en la necesidad de un análisis diacrónico y simultáneamente sincrónico, con su énfasis

tanto en las formas de la protesta como en sus transformaciones.

En segundo lugar, la noción de repertorio es eminentemente *política* pues este conjunto de rutinas beligerantes: a) surge de luchas continuas contra el Estado, b) tiene una relación íntima con la vida cotidiana y con las rutinas políticas y c) es condicionada por las formas de represión estatal. En este sentido, Tilly nos previene contra un error bastante generalizado entre los observadores de la protesta: las penurias, los problemas sociales (llámense pobreza, desempleo o lisa y llanamente hambre) no bastan para provocar la protesta. Las necesidades, por urgentes y angustiantes que sean, no son suficientes para generar acción colectiva; éstas operan en una matriz de relaciones políticas, luchas colectivas anteriores y respuestas estatales a esas luchas. La beligerancia, dice Tilly, “no expresa los descontentos y/o problemas de una población sino que surge de los procesos políticos centrales de ésta” (Tilly 1997:120). Sidney Tarrow, otro estudioso de la protesta, lo pone en términos similares: “los cambios en las oportunidades y condicionamientos políticos son los incentivos más importantes para iniciar una nueva fase de beligerancia” (Tarrow 1998: 7).

En tercer lugar, el concepto de repertorio es *cultural* en su raíz, pues se centra en los hábitos de beligerancia adoptados por los distintos actores, en las formas que toma la acción colectiva como resultado de expectativas compartidas e improvisaciones aprendidas. El repertorio no es meramente un conjunto de *medios* para formular reclamos sino una colección de *sentidos* que emergen en la lucha, de manera relacional; sentidos que, como diría Geertz (2000: 76) se “imprimen en el flujo de los eventos”. *Aprendizaje por medio de la lucha*: esta idea está en el centro de la metáfora teatral de repertorio: “Los repertorios son creaciones culturales aprendidas, pero no descienden de una filosofía abstracta” (Tilly 1995:26) (tampoco, podríamos agregar, del “espíritu del pueblo”), sino que emergen de la lucha, de las interacciones entre los ciudadanos y el Estado. ¿Qué es lo que aprenden los

manifestantes? Para Tilly “la gente aprende a romper ventanas en una protesta [...] a destruir casas no honorables, a llevar a cabo marchas, peticiones, reuniones formales, a organizar asociaciones específicas. En un momento particular de la historia, sin embargo, aprenden un conjunto relativamente pequeño de formas alternativas de actuar en conjunto”. ¿Cómo afecta este proceso las maneras subsiguientes de manifestarse? “El repertorio existente constriñe la acción colectiva; lejos de la imagen que algunas veces tenemos de multitudes irracionales, la gente tiende a actuar dentro de límites conocidos, a innovar en los márgenes de las formas existentes y a perder muchas oportunidades que, en principio, estarían disponibles. Ese condicionamiento es resultado, en parte, de las ventajas de la familiaridad, en parte de la participación de otros actores en las formas establecidas de acción colectiva” (Tilly 1986: 390-391). De esta manera, el concepto nos invita a combinar dos intereses que, por mucho tiempo, han estado divorciados: el impacto que tiene el cambio estructural en la protesta y los cambios en la cultura de la lucha popular (Tarrow 1996).

Llevar a Tilly al campo de la insurgencia popular argentina sugiere que debemos prestar atención *simultánea* a las siguientes variables:

- Las *regularidades en las formas de beligerancia*. La primera parte de este artículo examina la última década de protesta e identifica dentro de una gran variedad de formas, una modalidad crecientemente normativa de lucha colectiva: las huelgas en las fábricas dejan su lugar como forma predominante de protesta, a los cortes de rutas nacionales y provinciales.
- Los *cambios estructurales en la raíz de estas regularidades*. La segunda parte del artículo examina la desproletarización, la retirada del Estado, y la descentralización de servicios de salud y educación como las tres macro transformaciones que afectan la dinámica beligerante durante la última década.

-
- La *interacción entre intereses, organizaciones, oportunidades e identidades* que actúa como una suerte de máquina traductora de las presiones creadas por estos grandes cambios. La tercera parte de este trabajo varía el ámbito de análisis de macro estructuras y procesos a micro interacciones (y de investigación de archivos a trabajo de campo etnográfico), al centrarse en las crecientemente dominantes identidades de los manifestantes (al mirar los entendimientos compartidos que dividen al “pueblo” de la “clase política”), en sus intereses (al describir cómo la protección del trabajo y la adquisición o defensa de subsidios de desempleo devienen bases de la beligerancia), sus organizaciones (al examinar la multiplicación de organizaciones de base) y sus oportunidades para actuar (al observar, sobre todo, al faccionalismo de las elites como un aspecto central en la génesis de la protesta).
 - Las *continuidades entre protesta y política rutinaria*. La cuarta y última parte indaga brevemente la relación que la protesta tiene con una forma dominante de la política cotidiana en el país: el clientelismo. Se prestará particular atención al funcionamiento de las redes clientelares: como proveedoras de recursos fundamentales para iniciar la movilización; como factores cruciales para entender la forma que toma la protesta, y como canales por los cuales los logros materiales obtenidos por los manifestantes como resultado de un episodio contencioso específico, son distribuidos luego de dicho evento, dejando fuera a algunos protagonistas del conflicto y ocasionando una nueva fase de protesta.

En las conclusiones trato distintos aspectos que, al ser constitutivos del concepto de repertorio, requieren de mayor investigación empírica: el proceso de aprendizaje colectivo por medio del cual los medios y sentidos de la protesta son incorporados a los esquemas beligerantes de los actores y luego ejercitados; las formas que ha tomado la represión estatal

durante la última década y que sin duda, actuaron sobre las características de la protesta, y el papel jugado por las concesiones gubernamentales en la adopción del corte de ruta como forma particular dominante.

Este artículo se basa en un gran cuerpo de datos documentales y etnográficos que incluye: a) análisis de contenido de los diarios nacionales: La Nación, El Clarín, Página 12 (1990 y 2000) y regionales: La Mañana del Sur, Río Negro, El Litoral, El Liberal, Diario del Norte (que cubrieron protestas específicas); b) trabajo de campo etnográfico en las ciudades de Santiago del Estero, Cutral-co, y Plaza Huincul entre los meses de junio y julio (1999), julio y agosto (2000) y enero y marzo (2001). Entrevisté a decenas de manifestantes, periodistas, líderes sindicales, curas y monjas, policías, profesores secundarios y universitarios y maestras primarias, jueces y otros funcionarios locales (concejales, ex intendentes, etc.). El trabajo de campo también incluyó la recolección de comunicados de prensa de diversas organizaciones, volantes, diarios personales de manifestantes, expedientes policiales y penales. Además, observé videos producidos por canales de televisión locales y por particulares.

Las formas de la beligerancia

Otros dos ciclos de beligerancia durante la última década sirven para ejemplificar las recientes modalidades de protesta que los tres episodios mencionados encapsulan a manera de tipos ideales realmente existentes. Entre abril y junio de 1997, los cortes de ruta en demanda de empleo y ataques a edificios públicos se multiplicaron en el país. En abril, las ciudades de Cutral-co y Plaza Huincul fueron sitiadas durante varios días en reclamo del cumplimiento de las promesas realizadas por el gobernador luego de que los habitantes de la zona realizaran su primera *pueblada* en junio de 1996. Tres meses más tarde, autoridades de los gobiernos provincial y municipal fueron tomadas como rehenes por unos 300

manifestantes que reclamaban el aumento en los subsidios de empleo. En mayo, 21 cortes de ruta organizados por gremios municipales y organizaciones de desempleados, aislaron la provincia de Jujuy durante 12 días, a consecuencia de lo cual todo el gabinete ministerial del entonces gobernador Ferraro presentó su renuncia.

Cutral-co y Jujuy son tal vez los casos más recordados pero no los únicos. En estos meses, ‘piqueteros’, ‘fogoneros’ y ‘zanjeros’ cortaron la Ruta Nacional 3 en Trelew (Chubut) por un día, en demanda de puestos de trabajo; vecinos y desocupados organizados en una multisectorial interrumpieron el tráfico en la Ruta Nacional 38 en Cruz del Eje (Córdoba); los municipales pidieron la incorporación a la planta permanente de la municipalidad y el pago de sueldos atrasados, cortaron además, la Ruta 11 en Capitán Bermúdez (Santa Fe). En estos meses, también ocurrieron cortes de rutas nacionales y provinciales en Catriel (Río Negro), Banda del Río Salí (Tucumán) y en la ciudad de Neuquén, mientras que los maestros de todo el país confluyeron en la Plaza de los dos Congresos (Buenos Aires) y levantaron allí la llamada “Carpa Blanca”.

A poco más de tres años, en noviembre del 2000, esta forma de protesta ya había sido aprendida y adoptada en todo el país. Se suceden cortes en Isidro Casanova, Esteban Echeverría, y Glew (Buenos Aires), Plottier (Neuquén), Salvador Mazza, Tartagal, General Mosconi, Cuña Muerta y Zanja Honda (Salta), Libertador General San Martín (Jujuy), Resistencia (Chaco), Belén (Catamarca).

Entre los numerosos observadores de las nuevas formas de protesta (Schuster 1999; Scribano 1999) quizás sea Marina Farinetti quien más detalladamente ha diagnosticado las transformaciones en la beligerancia popular, ocurridas a partir de los inicios de la década del 90. Según esta autora (1999: 30), el periodo está marcado por: el *desplazamiento* del conflicto laboral del área industrial al sector público; la *disminución* de reclamos por aumentos salariales y el *crecimiento* de demandas por pago de salarios adeudados y por

despidos; la *reducción* de huelgas y el *incremento* de cortes de ruta, ollas populares y huelgas de hambre como modos de acción colectiva; el *aumento* de la frecuencia de la protesta en las provincias, y el *creciente protagonismo* de los gremios provinciales y municipales como actores centrales del conflicto.¹ Para Farinetti (1999), estas protestas, “devinieron en formas de organización popular nuevas: asambleas populares, organizaciones no gubernamentales, etc. Estas formas de organización re-crearon -o crearon- redes sociales. Más que las protestas de los estatales en las provincias por el pago de salarios atrasados o contra las medidas de ajuste, los cortes de ruta llevaron la política a territorios rezagados y colocaron el tema de la desocupación y las consecuencias sociales de la política socioeconómica del gobierno en el centro del debate”.

A pesar de la gran variedad de formas de protesta existentes durante los 90, las modalidades por las cuales la gente común formula sus reclamos parecen agruparse en un conjunto limitado y bastante bien definido de tipos de acción. Estas formas no cambian radicalmente entre una fase y la otra (digamos entre abril y junio de 1997 y noviembre del 2000) cuando actores similares activaron la protesta (desocupados y/o empleados públicos). Es más, los manifestantes parecen darse cuenta de esta recurrencia al referirse pública y análogamente a sus acciones y a las de otros (el corte), a sus autodefiniciones y a las de otros manifestantes (la de *piqueteros* fue la denominación que comenzó a aparecer con más frecuencia). Es evidente la emergencia de una forma de protestar, un cúmulo de rutinas aprendidas y compartidas mediante las cuales los grupos sociales formularon colectivamente reclamos al Estado.

1 De acuerdo a un informe del Centro de Estudios Nueva Mayoría los cortes de ruta casi se cuadruplicaron entre 1997 y el 2000 y se concentran desproporcionadamente (con relación a la cantidad de población) en las provincias.



Han emergido formas de protestar, rutinas aprendidas y compartidas mediante las cuales los grupos sociales formulan colectivamente demandas al Estado. Las modalidades de reclamo de la gente común, existentes durante los 90, parecen agruparse en un conjunto limitado y bastante bien definido de tipos de acción

Cortes vs. huelgas: falsa dicotomía

Conviene sin embargo, no exagerar el carácter novedoso de las formas y sentidos de la protesta con el fin de no perder de vista la continuidad existente con modalidades previas de lucha. Estas “nuevas formas” no reemplazan a otras, como la huelga y la manifestación callejera, ni pueden ser asociadas simplemente a una demanda en particular como el reclamo de empleo. Por el contrario, cortes y paros, ataques a edificios y manifestaciones, campamentos y huelgas, conviven, se complementan y se potencian de acuerdo a su relativo éxito o fracaso en la obtención de sus demandas. Si bien la forma “corte de ruta” está predominantemente asociada a la demanda de trabajo y de subsidios de empleo (los llamados “Planes Trabajar”) no puede ser vinculada de manera directa y exclusiva con un tipo de reclamo, como lo demuestran los ganaderos con sus cortes de ruta en protesta por el resurgimiento de la aftosa en Formosa; los trabajadores del ingenio La Esperanza en San Pedro (Jujuy) en demanda del pago de salarios atrasados o los grupos indígenas que bloquean el paso en la Ruta 34 en Salta en demanda de tierras (noviembre del 2000). Si bien los desocupados adquieren prominencia en los cortes de ruta, los sindicatos de empleados estatales y los gremios docentes (en Jujuy en 1993, 1995 y 1997 o en Neuquén en 1997, por ejemplo), organizaciones de segundo grado (la Central Argentina de Trabajadores en los cortes de ruta en el Gran Buenos Aires), y otros tipos de organización (frentes barriales, comisiones vecinales, etc.) también adoptaron

esta forma de lucha colectiva. Quizás sean las huelgas de los años 1997 (agosto) y 2000 (junio), llevadas a cabo durante los gobiernos de Menem y De la Rúa, las que mejor grafiquen esta coexistencia de formas establecidas de protesta con otras emergentes. El paro general del 97 combinó cortes de ruta, ollas populares, manifestaciones y piquetes de huelga en todo el país. El paro del 2000 incluyó cortes de puente (Misiones y Capital Federal); de ruta (Jujuy y Chubut); de vías ferroviarias (Castelar, provincia de Buenos Aires); ataques a oficinas de Repsol -YPF (Neuquén), del Citibank (Santa Fe y San Juan); pedradas contra edificios públicos (Secretaría de Educación en Neuquén), y bloqueos a destilerías (Ensenada, Provincia de Buenos Aires).

Por último, la dicotomía huelga (de trabajadores) - cortes de ruta (de desempleados) nos puede hacer perder de vista el encadenamiento de las emergentes formas de protesta durante los 90, con otras que predominaron en los 80: quizás haga falta recordar que uno de los líderes de la Federación de Tierras y Vivienda (Luis D’Elia), organización clave durante los cortes de ruta en el Gran Buenos Aires, fue también uno de los organizadores de las tomas de tierras (asentamientos poblacionales en tierras fiscales y/o privadas) durante la dictadura y el primer gobierno democrático (Merklen 1991). Cuando en noviembre del 2000, las autoridades de los gobiernos provincial y nacional no accedían a las demandas de quienes cortaban la ruta en La Matanza, uno de los piqueteros encapsula en un solo comentario lo que a muchos observadores de la protesta en Argentina parece esca-

párseles, en sus intentos por construir modelos dicotómicos de la acción colectiva, decía: “Si es necesario, les vamos a armar un asentamiento en la ruta.”

Hiper desempleo, abandono estatal, y descentralización

El contexto estructural de este aumento y el cambio de forma de la beligerancia popular están caracterizados por tres procesos que, si bien pueden ser separados analíticamente, se encuentran en la raíz de la protesta de manera simultánea y se refuerzan mutuamente:

- *La desproletarización*: el aumento explosivo de la desocupación, producto de la desindustrialización del país y de la desconexión funcional entre las tendencias macro económicas y los niveles de empleo² ha sido objeto de numerosos y detallados estudios por lo que no me detendré aquí en este aspecto³. Como sintetiza Aronskind (2001): “Los pobres eran el 21,5% de la población en 1991, y el 27% al final del período (en el 2000). Los indigentes eran el 3% de la población, para alcanzar el 7% en el 2000. Los desocupados y subocupados, aproximadamente 1.600.000 personas al comienzo de la década, superaban los 4.000.000 al fin de la misma”.
- *La retirada y el desmantelamiento del Esta-*

2 Desde 1991, el crecimiento del PIB viene de la mano con el aumento del desempleo. De acuerdo a datos provenientes del Banco Central de la Nación y del Ministerio de Economía, el crecimiento del PIB fue de 8,9% en 1991, 8,7% en 1992, 6% en 1991, y 7,4% en 1994. Durante esta fase expansiva de la economía, la tasa de desempleo creció, de acuerdo a las mismas fuentes, de 6,9% a 10,7%. Tomando en cuenta a las firmas industriales líderes, la desconexión funcional entre crecimiento económico y empleo es aún más clara. Ha habido un crecimiento del 35% en el PIB de estas firmas entre 1991 y 1994, y un 10% de reducción en su personal.

3 Se pueden consultar los excelentes trabajos de Lo Vuolo y Barbeito (1993); Beccaria y López (1996); Murmis y Feldman (1996).

do de bienestar-populista hacen que los riesgos implicados en situaciones de privación material sean aún mayores. En la última década, la Argentina ha asistido a un proceso de constante degradación de los sistemas públicos de educación, salud y de las políticas de vivienda dedicadas a sectores de bajos ingresos. El carácter caótico de las políticas destinadas a “combatir el desempleo” y de las políticas sociales destinadas a “combatir la pobreza” hace que la situación sea aún peor: los pobres son cada vez más débiles y están cada día más desprotegidos. Una particular indiferencia ha demostrado el Estado con respecto al destino de los desempleados: el seguro de desempleo cubre a una exigua proporción de quienes perdieron su trabajo y el dinero otorgado en cada subsidio no alcanza a cubrir sus necesidades básicas.

La privatización de las empresas estatales no es sólo otro aspecto de la retirada del Estado de sus funciones básicas sino que tiene un importante impacto en los niveles de empleo. Entre 1989 y 1999, aproximadamente 150.000 trabajadores perdieron sus ocupaciones como consecuencia directa del proceso de privatización de las compañías estatales de teléfonos, correos, aviación, agua, energía, transporte ferroviarios y gas. Como veremos, el caso de Yacimientos Petrolíferos Fiscales -YPF- es de particular importancia dado que muchos de sus despidos ocurrieron en comunidades cuya existencia dependía, en buena medida, de la presencia de esta empresa (Cutral-co y Plaza Huincul en Neuquén, Tartagal y General Mosconi en Salta, por ejemplo).

- Junto al hiper desempleo y a la retirada del Estado en su función de bienestar (ya que su función represiva no ha menguado), *el proceso de descentralización de los servicios educativos y de salud* es otro aspecto que, si bien no ha sido estudiado con relación al aumento de la protesta, es de crucial importancia para entenderla. A partir del año 1989, los servicios educativos (sobre todo

la educación media) y los de salud comenzaron a ser transferidos de la órbita del Gobierno Federal hacia las provincias⁴, descentralización que profundiza la crisis de ambos sectores dado que las administraciones provinciales tienen que afrontar esta nueva responsabilidad con sus ya escasos recursos financieros. Como afirma Rodríguez Larreta: “el personal no solo está sujeto a los bajos salarios en el sector, sino que ese hecho se combina conflictivamente al tratarse de empleados públicos provinciales, con las recurrentes crisis de las economías de las jurisdicciones subnacionales”⁵ (Rodríguez Larreta et al. 2000).

Estos cambios transformaron a los gobiernos provinciales en objeto de demandas por parte de los ahora provinciales, empleados públicos. El aumento de la protesta por parte de los docentes y trabajadores de la salud en las provincias (los llamados “jeringazos” en los hospitales públicos de Corrientes y los innumerables paros en la educación) son difíciles de comprender si no se tiene en cuenta que, como consecuencia directa del proceso de descentralización, lo que cambia es el blanco de las demandas, el *locus* de la acción colectiva; de reclamar al Estado nacional, antes responsable por salarios, condiciones de trabajo, infraestructura, etc., ahora la protesta se traslada al ámbito provincial -veremos, cómo, en el caso de Santiago esto se expresa claramente en los inicios del conflictivo año 1993.

La retirada del Estado y el hiperdesempleo vistos desde abajo

Cutral-co y Plaza Huincul se originan y desarrollan a partir de la actividad petrolera. Desde sus comienzos en 1918 y 1933 respectivamente, ambas ciudades crecieron al ritmo (y se volvieron altamente dependientes) de los beneficios provistos por la extracción de petróleo y las actividades de la compañía estatal YPF. Al descubrimiento del “oro negro” en la región, le siguieron su ocupación territorial y el asentamiento poblacional, ambos llevados a cabo bajo auspicio estatal. El rápido crecimiento demográfico de las dos ciudades refleja la expansión de las actividades de YPF: entre 1947 y 1990, el total de la población aumentó de 6.452 a 44.711 habitantes, un crecimiento demográfico impresionante bajo cualquier estándar.

El estado de bienestar representado por YPF otorgaba a sus obreros salarios más altos que el promedio nacional, viviendas modernas servidas por el mismo personal de la empresa, acceso a un excelente hospital, obra social y vacaciones pagas. El bienestar de YPF se extendía más allá de los límites de la empresa: toda la vida económica y social de la región estaba dinamizada por su presencia: barrios enteros, tendidos de luz y cloacas, un hospital moderno, un teatro y un centro deportivo.

En menos de 2 años, un sistema económico y una forma de vida que duró más de 4 décadas se hicieron trizas. La privatización de YPF fue sancionada por el Congreso de la Nación el 24 de septiembre de 1992 y al poco tiempo, los devastadores efectos se hicieron sentir en ambas comunidades. YPF no sólo redujo su personal de 4.200 operarios a 600, en menos de un año (Favaro y otros Ibid.), sino que dejó de ser la empresa-bienestar alrededor de la cual giraba la vida de ambas ciudades; se convirtió en una industria de enclave conducida bajo premisas estrictamente capitalistas.

Mientras ocurrían los despidos masivos, los artículos en los principales periódicos

4 Para estudios detallados del proceso, se pueden consultar los trabajos de Rodríguez Larreta et al. 2000 y Rothen 1999.

5 En 1987, por ejemplo, 53% de los profesores secundarios eran empleados federales, 10 años más tarde sólo el 3% de ellos se mantuvo en el ámbito federal. Cerca de 47% de ellos eran empleados provinciales en 1987; 10 años más tarde 98% de los profesores secundarios trabajaban para los gobiernos provinciales

describían el “sentimiento de incertidumbre” sobre los inicios de un proceso que hoy se encuentra en su forma avanzada: el hiper desempleo. En Cutral-co, el 30% de la población económicamente activa (25.340 habitantes) estaba desempleada en 1997. En la actualidad, más de la mitad de la población de ambas ciudades vive debajo de la línea oficial de pobreza (Favaro y otros Ibid.: 17).⁶

Lejos de allí, en el extremo norte del país, un residente de General Mosconi (provincia de Salta) describe a la ciudad en términos dolorosamente familiares para los cutralquenses y huinculenses: “Hace 10 años Mosconi se transformó en un pueblo fantasma. La privatización de YPF marcó el fin de una época dorada. Mi marido trabajó durante 20 años en el Correo y siempre hablaba de los enormes aguinaldos que cobraban los empleados de la empresa petrolera. Ahora, la gente tiene que salir a cortar la ruta para recibir poco más que una limosna.”

Organización e intereses

La desproletarización y la retirada del Estado ubicaron nuevos actores (desempleados) y nuevas demandas (empleo) en el centro de la escena junto a trabajadores del sector público, en la mayoría de los casos, que exigían sus salarios impagos; la descentralización convirtió a las administraciones provinciales en objeto de reclamo; en ciertos casos, la generalizada corrupción de éstas hizo que, como veremos, las identidades que se construyeron en la protesta adquirieran una carácter político específico.

Durante los 90, con el crecimiento de la insurgencia, se multiplicaron simultáneamente las organizaciones de base, las más activas fueron aquellas que agruparon a los desempleados.



La interacción entre intereses, redes, oportunidades e identidades insurgentes: el caso de Cutral-co y Plaza Huincul 1996

Temprano en la mañana del 20 de junio de 1996, una de las principales radios de Cutral-co y Plaza Huincul, Radio Victoria, emitía la noticia de la cancelación del contrato entre el gobierno provincial y la compañía canadiense Agrium para la construcción de una planta de fertilizantes, que habría de generar alrededor de 50 puestos de trabajo permanentes en la zona; la radio difundió la noticia y “abrió los micrófonos a los oyentes. Se empezaron a suceder los llamados, que con el correr de las horas se fueron incrementando”. El dueño y director de la radio, Mario Fernández, cuenta que: “Llegaron a entrar llamados telefónicos donde la gente decía que era lamentable lo que ocurría... que había que participar... hubo quien propuso (reunirse) en la ruta” (ver Sánchez 1997). Quienes participaron en la pueblada recuerdan esos mensajes radiales, no sólo por cómo la radio convoca a la gente, sino también por la manera en que la radio *enmarca* la cancelación del proyecto de la planta de fertilizantes.⁷ En Radio Victoria, el ex Intendente Adolfo Grittini y Fernández, su

6 En marzo 2001, sólo el 35% de los desempleados recibían subsidios (de un promedio de USD 150) del gobierno nacional o provincial.

7 Sobre la noción de “marco” y su relevancia en la acción colectiva, ver Snow y Benford (1988, 1992); Benford y Snow (2000).

aliado político del momento, describen la suspensión del proyecto como “la última esperanza perdida”, “como un tremendo golpe para ambas comunidades”, como una “decisión totalmente arbitraria del gobierno provincial”. Daniel, un manifestante que pasó días y noches en uno de los piquetes, recuerda: “Había mucha ira... la radio... decía que había que ir a apoyar, que hacían falta personas valientes”. “Yo me enteré del corte,” recuerda Zulma, “por la radio... estaban hablando de la situación social”. Daniel, Zulma y muchos otros apuntan al mismo agente y a sus similares funciones: una de las radios locales construía un sentido de lo que estaba sucediendo y procuraba persuadir a la gente para que se acercara a la ruta.

Mientras la radio emitía “la ira que sentíamos” (Daniel) y convocaba a manifestarse a la Torre Uno sobre la ruta 22, los taxis y remises locales llevaban a la gente sin cargo. ¿Era esta una abrupta expresión de indignación colectiva en la cual los periodistas radiales, los taxistas y remiseros eran solo los primeros en reaccionar? Difícil de creer. Las disputas internas dentro del entonces partido de gobierno, el Movimiento Popular Neuquino - MPN-, y en particular, las acciones del ex intendente, Grittini (Línea Blanca) quien llevaba a cabo su lucha interna y personal contra el intendente Martinasso y contra el gobernador Sapag (Línea Amarilla), estaban en la raíz, no sólo del “marco de injusticia” con el que se presenta la cancelación del contrato con Agrium, sino también de la movilización de recursos que ocurre durante ese primer día de la pueblada. En una entrevista que me pidió no grabara, porque “la verdad no puede ser contada frente a un grabador”, el entonces intendente de Cutral-co, Daniel Martinasso, me dijo: “Grittini apoyó la protesta durante los primeros días. ¿Cómo? En primer lugar, comprando un par de radios para que convoquen a la gente a la ruta.” “¿Es tan fácil comprar una radio?”, pregunté. “Mirá, yo mismo le pagué la radio... para que dijera lindas cosas sobre mí y sobre mi administración. El *living* que vos ves al entrar a la radio lo hicie-

ron con plata que yo les pagué... así es la política en Cutral-co”, me explicó. Los esfuerzos organizativos de Grittini y sus aliados (siendo Fernández uno de los más importantes) no terminan allí. Si bien la evidencia es circunstancial, muchas fuentes consultadas (periodistas, políticos y los propios piqueteros) indican que él también envió los camiones con los cientos de gomas utilizadas en las barricadas y las topadoras para interrumpir el tráfico. Grittini también estuvo detrás de la distribución gratuita de comida, nafta, leña y cigarrillos en los piquetes durante los dos o tres primeros días de la protesta. Hay quienes sugieren que él pagó 50 pesos por noche a decenas de jóvenes piqueteros, y que sus seguidores distribuyeron vino y drogas que los piqueteros pagaron con la plata que él mismo les dio.

Las cámaras de televisión y los diarios registran la presencia de Grittini entre los manifestantes, sobre todo, durante los dos primeros días de la protesta. En una larga entrevista le pregunté sobre sus acciones durante estos días. Lo que obtuve fue una firme reivindicación de la pueblada como una “acción espontánea en defensa de lo que la gente se merece”, pero ninguna mención sobre el apoyo material brindado a la protesta. Es más, por oposición a su entonces archi rival, el intendente Martinasso, no ve ninguna conexión entre el faccionalismo del MPN y el surgimiento de la protesta (“eso no tiene nada que ver con la *pueblada*”, me dice). Tanto él como el dueño de Radio Victoria insisten en el carácter espontáneo, natural y sorpresivo de la revuelta.

Estén o no detrás Grittini y su grupo, la movilización de recursos y la construcción de la cancelación del proyecto como “decisión arbitraria” sí ocurrieron. La radio emitió los “mensajes de ira”, decían que “algo había que hacer” y convocaron a la gente a la Torre Uno; alguien llevó cubiertas de autos y de camiones, y distribuyó sin cargo: comida, cigarrillos, y otros productos -“¡Teníamos hasta pañales para bebés!” -recuerdan varias mujeres en los piquetes. La movilización de recur-

.....

sos y el “enmarcamiento” del problema (que considero son precondiciones de la protesta) no ocurrieron sin embargo en el vacío sino, en primer lugar, en un contexto que, como vimos al hablar de la desaparición del trabajo asalariado y del rápido incremento de la pobreza, estaba maduro para una revuelta de gran escala, y en segundo lugar, mediante redes políticas bien establecidas mediante las cuales se distribuyeron información y recursos.

“Che, esto no es joda, acá hay gente bien vestida,” dijo un gendarme que, cuando vio que 20.000 personas esperaban a los menos de doscientos gendarmes en la Torre Uno de Plaza Huincul, el 25 de junio de 1996. La multitud, que había bloqueado el acceso a Plaza Huincul y a Cutral-co durante 5 días, incluía “gente bien vestida” no solo pobres y desocupados. Y por tanto, “no era joda”, era una protesta que excedía la capacidad represiva de la gendarmería, no sólo por el número sino por la diversidad del “objetivo”. La jueza federal que comandaba el pelotón de gendarmería con la orden de despejar la ruta pidió hablar con representantes de esas 20.000 almas; en medio de la ruta los habitantes de Cutral-co y Plaza Huincul le espetaron: “Acá no hay representantes, acá está el pueblo... venga a hablar con el pueblo.”

A 4 años de la protesta, Laura, portavoz de la comisión de piqueteros, afirma: “Decir que esa fue una protesta de desocupados o de los excluidos, es hacer una mala lectura. Ahí estaba todo el pueblo.” La evaluación de Laura fue y es compartida por muchos habitantes de Cutral-co y Plaza Huincul; durante los días de la protesta, los habitantes de esas dos localidades repitieron frente a las cámaras: “Nosotros queremos laborar. Les damos la luz, el gas, el petróleo y ¿Nos pagan así? ¿Que venga Felipe!, somos 30.000, no somos 5.000. ¡Está todo el pueblo, acá no hay políticos, acá está el pueblo!”

Esta multitud-en-la-ruta se definía como *unida; numerosa; comprometida* con un objetivo; *valiosa y carente de líderes políticos*. Tanto en las maneras de llamarse a sí mismos como en su composición social, tanto en su dis-

curso como en sus relaciones sociales, los manifestantes construyeron una identidad participativa que giraba alrededor de la noción de “pueblo”.

Esta identidad insurgente, sin embargo, no aparece de la nada ni de un sustrato siempre presente dispuesto a activarse frente a una situación objetivamente injusta (como si tal cosa existiese); es, por el contrario, una construcción colectiva y conflictiva. Durante seis noches y siete días en la ruta, los manifestantes realizaron incansables esfuerzos por definirse a sí mismos diciendo quiénes *eran* y quiénes *no eran*.

En las afirmaciones de Laura y de muchos otros piqueteros, el término “pueblo” tiene dos connotaciones diferentes. Por un lado, el “pueblo” se refiere a la localidad, a las ciudades de Cutral-co y Plaza Huincul. Las repetidas referencias a “todo el pueblo” apuntan, parcialmente al hecho de que buena parte de la población de ambas ciudades estaba en la ruta. Y lo estaban para que el Gobernador y “todo el país” reconociesen el proceso de extinción por el que rápidamente atraviesan luego de la privatización de YPF. En las representaciones de los habitantes, este es un pueblo muy especial porque provee de energía (gas y petróleo) al resto del país. Como grita un piquetero, a metros de los amenazantes gendarmes: “Les damos el gas, la nafta, la electricidad... ¿Y nos pagan así?” El piquetero se refiere de esta manera al pueblo-como-localidad, una significación que está profundamente enraizada en las creencias comunes de los habitantes de la región. Entre cutralquenses y huinculenses existe una creencia generalizada (enraizada, a su vez, en una pertinaz retórica nacionalista que describe a los habitantes como “dueños” del petróleo de la región) de que los recursos minerales de YPF les pertenecen. La frase “*Nosotros* les damos el gas, *nosotros* les....” no es pues, una expresión idiosincrática de este piquetero, sino que repetida en más de una ocasión durante la protesta, reflejaba un conjunto de creencias compartidas: los entendimientos mutuos, las identidades colectivas que se forjaron en la ruta durante

esos días, encuentran sus raíces (sus bases materiales, diría) no sólo en la situación actual de Cutral-co y Plaza Huincul como ciudades en peligro de extinción, sino en las memorias de los “tiempos de oro” de YPF y en una convicción compartida sobre la propiedad de los recursos naturales. Así, las memorias colectivas sobre el funcionamiento de un Estado de semibienestar durante el tiempo de YPF otorgan una suerte de ímpetu solidario para organizarse colectivamente y defender los que son considerados intereses de la ciudad. Este “nosotros” colectivo tiene dos preocupaciones fundamentales: la falta de oportunidades y trabajo y los riesgos que éstas implican para la supervivencia de ambas comunidades.

Existe, sin embargo, otra connotación importante del término “pueblo” implícita en el rugir de la multitud. Los manifestantes construyeron su identidad colectiva y sus demandas en términos democráticos contra lo que ellos percibían como oscuras negociaciones de los políticos y sus constantes intentos de “usar al pueblo”. Desde el punto de vista piquetero, quiénes eran los manifestantes y por qué estaban en la ruta tiene tanto que ver con la devastación provocada por la retirada del Estado, expresada en la privatización de la empresa petrolera estatal, como con la ruina producida por las acciones interesadas de los políticos. Una perspectiva sensible a las palabras y las acciones de la multitud, a las demandas y a las creencias compartidas, nos alerta sobre el actor principal *en oposición al cual* los piqueteros construyen su identidad: la “clase política” o, en términos de Laura, “las personas que están al mando [...] las personas que dicen que más adelante voy a hacer esto, si me votan, voy a hacer aquello”. Sin sus representantes habituales (o mejor dicho, a pesar de sus representantes) los manifestantes pueden hacer oír su voz de descontento por el rápido deterioro de ambas comunidades y hacérselo saber al resto del país. “Por una vez”, Laura y muchos otros piqueteros repiten una y otra vez, “los políticos no nos pudieron usar” sabedores de lo paradójico de esta afirmación dado que en el origen de sus ac-

ciones beligerantes estaban estos mismos políticos.

La lucha intra elites y las oportunidades para actuar: el correntinazo

Así como la pueblada ilustra la manera en que el faccionalismo de las elites políticas está vinculado a la movilización de recursos que detonan la protesta inicial, el caso del correntinazo muestra cómo las luchas intra elite, en ocasiones, posibilitan la movilización. Durante seis meses en Corrientes, los manifestantes reclamaron el pago de salarios, protestaban contra despidos en la administración pública, pedían “castigo a los responsables de la situación” y criticaban a viva voz “el clientelismo, los punteros políticos, el caudillismo y la corrupción” -gritaban, en otras palabras, contra el generalizado nepotismo gubernamental y contra una persistente manera de hacer política en la provincia.

Desde marzo de 1999 se incrementaron la frecuencia de las movilizaciones y el número de manifestantes. Las maestras de escuela fueron las primeras en tomar las calles cuando comenzó el calendario escolar, demandaban el aguinaldo adeudado desde diciembre. En abril, el sindicato de maestros lideró marchas masivas y en mayo, se sumaron otros empleados públicos (judiciales y administrativos) que bloquearon el puente General Belgrano por primera vez en el año. Desde entonces, la protesta comenzó a generalizarse con marchas, cortes de calles, concentraciones en la plaza principal, huelgas (de empleados públicos, de judiciales, y docentes) y un autoacuartelamiento policial.

Entre abril y diciembre se depusieron a dos gobernadores en rápida sucesión y se removió al intendente (ex gobernador y caudillo local) de la ciudad de Corrientes, “Tato” Romero Feris, quien fue arrestado (y luego sentenciado) bajo cargos de apropiación y uso ilegal de fondos públicos. Los dos gobernadores y el intendente (los tres pertenecientes al Partido Nuevo -PANU-) fueron desplazados

por una coalición de partidos opositores (peronistas, radicales, autonomistas liberales) que acusaba al gobernador Braillard Pocard de liderar una administración fraudulenta e incompetente.

El nuevo gobernador Perié se enfrentó con la quiebra de la administración, luego del monumental aumento de la deuda provincial contraída por el gobierno anterior. Entre 1993 y 1999 el gasto público al igual que la deuda, crecieron en la provincia de manera acelerada (de 561 a 1.400 millones) ¿De dónde provenía el dinero? Después de la provincia de La Rioja, Corrientes fue la más favorecida en términos de dinero recibido de los aportes del Tesoro Nacional. Las razones de este “privilegio” fueron estrictamente políticas. La administración del PANU había sido una aliada incondicional del presidente Menem (algunos analistas sostienen que la misma creación del PANU luego de una división del Partido Autonomista Liberal, fue una maquinación del menemismo). Esos fondos fueron, por una parte, a parar a los bolsillos de funcionarios corruptos y por otra, a financiar la desbordante expansión del empleo público. Indudablemente, el incremento del empleo público es una manera en la que los gobiernos provinciales lidian con el aumento del desempleo causado por la devastación de las economías regionales⁸, pero es también una manera en la que el gobierno provincial puede crear y mantener su maquinaria clientelista.

La nueva coalición en el gobierno enfrentó tres desafíos diferentes aunque relacionados: uno proveniente del PANU, el otro del gobierno nacional que amenazaba con la intervención federal, y el tercero el de los miles de empleados públicos que, desde el 7 de junio, acampaban en la plaza principal de la ciudad de Corrientes, rebautizada como *Plaza del aguante y la dignidad*.

Con el gobierno provincial en quiebra y en medio de la escalada de la protesta y la vio-

lencia, el gobierno nacional comenzó a considerar la intervención federal. A fin de evitar ser reemplazado por funcionarios federales y recibir fondos para pagar a los contenciosos empleados públicos, el nuevo gobierno fue forzado a implementar un “duro ajuste”, que consistía en un extenso programa de reducción de gastos y privatizaciones, que incluían la venta del banco provincial y de la Compañía de Energía. El ajuste, de acuerdo al mandato nacional, debía concentrarse en la municipalidad de Corrientes que tenía un exceso de aproximadamente 5.000 empleados. Como sostuvo el nuevo gobernador -al admitir implícitamente la vinculación entre clientelismo y empleo público: “La municipalidad de Corrientes tiene 7.000 empleados cuando nunca tuvo más de 2.000 [...] esto es un disparate. Tenemos que reducir el número de miembros del PANU que fueron contratados con fondos públicos”.

Desde el 7 de junio, cerca de 200 carpas ocupaban la plaza frente a la legislatura. Las primeras fueron levantadas por los maestros; una semana después no había más lugar en la plaza, trabajadores del interior de la provincia ocuparon los últimos lugares vacantes. Abogados, transportistas escolares, trabajadores municipales, maestras jardineras, empleados judiciales, trabajadores de sanidad, incluso familiares de agentes de la Policía provincial, tenían sus carpas. Bajo el nombre de “autoconvocados”, fracciones disidentes de varios sindicatos se unieron a la protesta. Los manifestantes hablaban de “recuperar las instituciones, la libertad y la justicia”, describían a la administración gubernamental como un “monumento a la corrupción”, organizaban sus marchas cantando “esto no es pagado, esto no es pagado” para diferenciarse de una manera de movilización política a la que criticaban como clientelar, al tiempo que una demarcación entre “nosotros, el pueblo” y “ellos, los gobernantes y los políticos” adquiría mayor nitidez con el transcurso de los días en la plaza. El mejor resumen que encontré sobre las demandas de los placeros proviene del título de uno de estos volantes distribui-

8 Se calcula que en la provincia de Corrientes la tasa de desempleo, sin tomar en cuenta el empleo público sería de 25,7% de la PEA, cuando la tasa actual es de 12,9% (datos del 2000).

dos en la plaza (*Aguanta. Hoja del Pueblo Correntino Autoconvocado*). El título dice: “¿Salarios o justicia?” y al pie de página se lee: “Salarios y justicia”.

Contrariamente a lo que se esperaba, el nuevo gobierno provincial no condenó las acciones de los manifestantes. Miembros de la coalición gobernante que destituyó al PANU reconocieron en repetidas oportunidades la importancia de los *placeros* (quienes siguieron las sesiones de la legislatura por los altoparlantes que transmitían los eventos en la plaza) en la remoción del gobernador y del intendente. Como un miembro de la coalición afirmó: “La gente en la plaza nos dio fuerza (para desplazar al gobernador)”. Ese mismo día, el nuevo gobernador admitía que tenían que obtener fondos del Gobierno Federal en forma apresurada “porque la plaza del aguante y la dignidad no nos va a dar mucho tiempo para que encontremos una solución [...] Si no encontramos una solución, el apoyo de la gente va a durar sólo unas horas”. Un mes más tarde, cuando las maestras decidieron continuar su huelga, el nuevo gobernador afirmaba: “Cuando recibamos más fondos vamos a pagar los salarios. Respetamos la decisión de los maestros de seguir con su protesta hasta que reciban sus salarios”.

Cuando una delegación de la Plaza del Aguante marchó a Buenos Aires con la intención de acampar en la Plaza de Mayo, el gobernador Perié se identificó con ellos al decir que “los correntinos estamos a punto de perder la paciencia [...] si no recibimos una solución, el pueblo de Corrientes sabrá qué hacer”.

Estos son algunos de los episodios que demuestran la *validación* del “aguante” por parte de los funcionarios del gobierno opuestos al PANU, convalidación que no puede comprenderse sin dar cuenta de las disputas intra elites, convalidación o certificación que provenía también de otro importante actor en la política local: la Iglesia católica. En repetidas oportunidades, las autoridades eclesíásticas reconocieron la legitimidad de sus demandas y de su “lucha”. Como un cura afirmó frente a la multitud reunida en la plaza: “Señor,

nuestro pueblo pide por la fuerza necesaria para mantener su dignidad”.⁹

Hacia mediados de diciembre, debido al bloqueo del puente General Belgrano, la ciudad de Corrientes estaba “prácticamente aislada”. Miles de manifestantes tuvieron repetidos enfrentamientos con la gendarmería durante los seis días que duró el bloqueo. Los negocios estaban cerrados por temor a los saqueos y debido al desabastecimiento. Prácticamente no hubo clases durante el año, la mayoría de los empleados públicos estaban en huelga, al igual que la Policía (esta última dividida en dos fracciones, aquellos leales a “Tato” y aquellos que apoyaban al nuevo gobierno), la mayoría de los servicios sociales (como los comedores infantiles) estaban suspendidos. En otras palabras, la vida cotidiana era un completo desorden dado que la ciudad vivía “al ritmo de la administración pública” (las ventas comerciales habían disminuido 80% en unos pocos meses).

Luego de haber sido testigo de la rápida sucesión de tres gobernadores en seis meses, la provincia tenía dos gobernadores de facto: uno elegido por la nueva legislatura (en octubre el PANU ganó las elecciones provinciales y pudo revertir la destitución de Braillard, quien intentó entrar a la casa de gobierno al liderar una marcha de 2.000 seguidores), y otro apoyado por la coalición. Después de que el gobierno nacional (finalmente) se decidiera por la intervención federal, la gendar-

9 Por otra parte, miembros del PANU, en especial su líder “Tato” Romero Feris, desacreditaban constantemente a los manifestantes como “falsos representantes de la voluntad popular”, como “manipulados por intereses externos a la provincia”. A menos de una semana de comenzado el campamento en la Plaza 25 de Mayo, el entonces intendente se refirió a ellos como “militantes de partidos políticos, gente traída del interior de la provincia y de otras provincias”. Argumentaba que eran menos de lo que los medios afirmaban, repetía las acusaciones que las elites, como vimos, han sostenido en más de una oportunidad durante esta última década: esto era el producto de agitadores externos. Como “Tato” sostuvo en una entrevista: “Esta es gente de Quebracho, de Patria Libre y de otros grupos de izquierda. Son los mismos que andan dando vueltas por la ciudad como vándalos, creando una falsa sensación de caos”.



Cortes de ruta, campamentos en plazas, ataques a edificios públicos, están no sólo en el centro político del país, sino que se ubican en el corazón de las formas en que los argentinos actúan colectivamente a favor de sus intereses. Estamos, si Tilly está en lo cierto, en el comienzo de una nueva era

mería reprimió brutalmente a los miles de manifestantes que bloqueaban el puente, mataron a dos manifestantes en acciones que aún no han sido esclarecidas.

Movilización de recursos y formas cotidianas de clientelismo

Entendido como la “distribución (o la promesa) de recursos por parte de funcionarios o candidatos políticos a cambio de apoyo político, fundamentalmente, aunque no de manera exclusiva, en la forma de votos” (Gay 1990: 648), el clientelismo ha sido visto como un arreglo social *opuesto a* la acción colectiva contenciosa; como una forma de atomización y fragmentación del electorado o de los “sectores populares” (Rock 1972 y 1975), y como una forma de inhibir a la organización colectiva y de desalentar la participación política real y efectiva.¹⁰

La mayoría de los estudios académicos y las observaciones periodísticas concuerdan en que el predominio de este tipo de relación política frustra el surgimiento de la protesta. Sin embargo, si nos tomamos el trabajo de mirar más de cerca episodios específicos de beligerancia veremos que las redes clientelares están profundamente imbricadas en el *curso, génesis, y resultados* de la acción colectiva contenciosa. Los casos de Cutral-co y Plaza Huincul examinados anteriormente, ilustran claramente la relación entre el clientelismo y los orígenes de la protesta. En esta última sección, quiero explorar brevemente dos episo-

dios para demostrar la manera en que el funcionamiento de las redes clientelares también impacta en la forma (Santiago del Estero 1993) y los efectos (Salta 1997-2000) de la protesta. Además está decir, que se necesita una pormenorizada investigación empírica para entender los vínculos intrincados, y muchas veces ocultos, entre política clientelar y protesta popular.

Quizás el caso del *Santiagazo* de 1993 sea paradigmático en cuanto a la relación de las redes clientelares y la forma que adquirió la protesta. Las residencias de funcionarios y políticos locales que los manifestantes atacaron, saquearon y quemaron el 16 de diciembre habían sido definidas como “blancos” en los meses previos. La “precisión” con la que la multitud se movió de una casa a la otra —“precisión” en la que algunos funcionarios y periodistas vieron la prueba de la presencia de “agitadores”— ilustra, en realidad, la existencia de un itinerario tácito, que constituye una suerte de mapa que señala aquellas residencias que, en palabras de otro participante, “merecían ser quemadas”.

¿Cómo sabían los manifestantes quiénes lo “merecían” y quiénes no? La cartografía del fuego había sido construida en los meses previos mediante los reiterados escándalos de corrupción descritos en abundancia por el principal periódico local: “Lo que pasa es que en ese momento los blancos eran perfectamente visibles. Uno sabe quién es quién aquí en Santiago. Es chico, te conoces, los medios resaltan quién es quién... Era como que todo el mundo entendía que teníamos que ir ahí”, me explicaba Mariano a seis años de los hechos. Por otro lado, ese itinerario tácito seña-

¹⁰ Para una revisión crítica reciente, ver Gay (1998).

la las residencias de los jefes políticos, los dispensadores de favores personales más notorios; residencias que muchos manifestantes solían visitar con cierta frecuencia. Como me contaba Carlos, otro manifestante que encapsula en un comentario lo que debe ser objeto de detallada investigación:

Aquí, en Santiago, hay barras grandes que son multiuso, jóvenes marginales que el radicalismo, el peronismo, les paga el asado, los trasladada, les da unos pesos y son las barras de los actos... Ellos conocen todos los mecanismos para manguear a todos, desde punteros políticos hasta ministros. Y ellos no son ni radicales ni peronistas, ellos funcionan para todos. Entonces, conocen la casa. Porque el político corrupto al llevarlos, les va haciendo conocer parte de su operatoria. Entonces esos tipos venían en bandada y la gente les indicaba. Frente a la casa, se ponían ahí, rompían la puerta y entraban...

Así como Cutral-co y Plaza Huinul, las localidades de General Mosconi, Aguaray, Salvador Mazza, Campamento Vespucio y Tartagal en la provincia de Salta, han sido particularmente devastadas por la privatización de YPF, con tasas de desempleo que oscilan entre el 30% y el 40% de la población económicamente activa, estas pequeñas ciudades, como sus contrapartes en la Patagonia, están siempre al borde de transformarse en pueblos fantasmas. Campamento Vespucio, por ejemplo, perdió hospital, escuela, correo, y destacamento policial desde la privatización en 1992. Esta área registra niveles altísimos de beligerancia con cortes de ruta que duraron semanas y que ocurrieron con mayor intensidad y participación desde 1997.

El 10 de noviembre de 2000, al intentar remover a los manifestantes de la ruta 34, la policía local asesinó al piquetero Aníbal Verón. Al día siguiente, manifestantes atacaron y quemaron el edificio municipal de Tartagal; la sucursal del Banco Nación; la oficina de un parlamentario peronista; las oficinas de la

compañía de energía local; de Atahualpa (compañía de transportes en la que trabajaba Verón hasta ser despedido pocos días antes de su muerte); del periódico provincial (“El Tribuno”), y algunos comercios. Las acciones de los manifestantes apuntan con claridad al cataclismo ocasionado por el abandono oficial y el consiguiente hiper desempleo, pero al mismo tiempo hablan de la corrupción de los políticos y funcionarios locales.

A seis meses de esta protesta, en la misma zona, los piqueteros demandaban trabajos, la renuncia del intendente y de los concejales y la intervención de los municipios porque, según los manifestantes, los intendentes distribuían “los subsidios de empleo entre sus punteros políticos y nosotros no tenemos nada que darle a nuestras familias”. Cuando uno ve imágenes de manifestantes que atacan edificios públicos y demandan la renuncia de sus representantes tiene que contextualizar estas acciones en el conjunto de prácticas políticas dominantes y en su impugnación por parte de quienes no forman parte de ellas. Cuando uno escucha a la piquetera salteña decir que “nadie quiere a esos guanacos” (en referencia a los políticos locales) más que pensar en protestas “anti-políticas” habría que pensar en el significado de esta expresión en el contexto de un Estado local cuya manera predominante de distribuir recursos es a través de redes partidarias.

Salta nos enseña una lección: los recursos materiales que los manifestantes reclaman (y en ocasiones obtienen), son distribuidos (en más de una oportunidad) mediante aceitadas máquinas partidarias; una forma de adjudicación que excluye a muchos manifestantes, produce una nueva fase de (la misma) protesta, suma un nuevo objeto de reclamos (los funcionarios locales) y una nueva demanda (transparencia).

Conclusiones y tareas futuras

Cuando se les pregunta por las razones que los llevan a cortar una ruta (razones que no

necesariamente constituyen una buena guía para entender la cadena causal que origina la protesta), los manifestantes en distintos puntos del país responden con una frase similar: “Es la única manera de conseguir que nos escuchén”. Y una manera, agregaría, que ha probado cierto éxito. En realidad se podría aventurar la hipótesis de que el florecimiento de esta modalidad durante los 90, está íntimamente relacionado con cierta efectividad en la obtención de las demandas que los manifestantes expresaban en cada episodio.

Dos ejemplos bastan para ilustrar esta suerte de contagio que le sigue al éxito relativo de un episodio. El 16 de mayo de 2000, un grupo de mujeres cortó la Ruta 22 en Central-co, pocos días después de que funcionarios nacionales negociaran una solución a otro conflicto en la provincia de Salta. Estas mujeres reclamaban los mismos “Planes Trabajar” que sus contrapartes en el norte, decían que “Los que cortan las rutas son los que reciben ayuda”. En noviembre de ese mismo año, luego de que los funcionarios firmaran un acuerdo con los líderes piqueteros de La Matanza y les concedieran todas sus demandas, 4 nuevas protestas con similares reclamos, ocurrían en Buenos Aires (La Plata, Bosques, San Francisco Solano y Sarandí) y en Salta.

Este contagio o “efecto dominó” debe ser estudiado con mayor detalle para examinar: el papel que juegan las organizaciones de manifestantes y los medios nacionales y locales en la difusión de información sobre las formas de protesta exitosas y las no-exitosas; y el rol del aprendizaje colectivo en la adopción del corte de ruta y los ataques a edificios públicos como modalidades importantes dentro de un repertorio emergente. Al mismo tiempo, se debe prestar particular atención a los actores que “enseñan” a los no iniciados las formas prácticas de la beligerancia (quemar llantas, bloquear rutas, defenderse de la represión), de la protesta.

También necesitamos investigación y análisis sobre las bases del éxito que, en ocasiones, obtienen los manifestantes. Una posible

razón se relaciona con uno de los elementos que dan forma a un repertorio, es decir, con los patrones de represión estatal. Los manifestantes usualmente bloquean rutas nacionales porque saben que sólo tropas de la gendarmería pueden removerlos de allí (o al menos, eso es lo que esperan), y la gendarmería no llega inmediatamente al lugar del conflicto (como sí lo haría la Policía local); permite así a los manifestantes lograr apoyo, organizarse, establecer contactos con autoridades locales para negociar una solución. Las formas de represión, a su vez, han determinado la modalidad de la protesta, su duración, su grado de violencia y su recurrencia en formas que aún no conocemos con profundidad.

El 7 de noviembre de 2000, un artículo publicado en “El Clarín” describía al corte de ruta como una forma de protesta que “nació en la Patagonia... y está ahora a las puertas de la capital federal”. Los cortes, los campamentos en plazas, los ataques a edificios públicos, están no sólo en el centro político del país, sino que se ubican en el corazón de las formas en que los argentinos actúan colectivamente a favor de sus intereses. Estamos, si Tilly está en lo cierto, en el comienzo de una nueva era.

Bibliografía

- Aronskind, R., 2001, *¿Más cerca o más lejos del desarrollo? Transformaciones económicas en los 90*. Buenos Aires: Libros del Rojas, UBA.
- Barbeito, Alberto y Rubén Lo Vuolo, 1993, *La Modernización Excluyente*. Buenos Aires: Losada.
- Beccaria, Luis y Néstor López, 1996, “Notas sobre el comportamiento del mercado de trabajo urbano,” en *Sin trabajo. Las características del desempleo y sus efectos en la sociedad argentina*. Luis Beccaria y Néstor López (Ed.) Buenos Aires: Losada, pp. 17-46.
- Benford, Robert y David Snow, 2000, “Framing Processes and Social Movements: An Overview and Assessment.” *Annual Review of Sociology* 26: 611-639.

- Farinetti, Marina, 1999, "¿Qué queda del 'Movimiento Obrero'? Las Formas Del Reclamo Laboral En La Nueva Democracia Argentina." *Trabajo y Sociedad* 1, (Julio-Septiembre) <http://habitantes.elsitio.com/proit/zmarina.htm>.
- Favaro, Orietta, Mario Bucciarelli, y Graciela Luomo, 1997, "La Conflictividad Social En Neuquen. El Movimiento Cutralquense y Los Nuevos Sujetos Sociales." *Realidad Económica* 148: 13-27.
- Gay, Robert, 1990, "Community Organization and Clientelist Politics in Contemporary Brazil: a case study from suburban Rio de Janeiro". *International Journal of Urban and Regional Research* 14, N. 4: 648-665.
- _____ 1998, "Rethinking Clientelism: Demands, Discourses and Practices in Contemporary Brazil". *European Review of Latin American and Caribbean Studies* 65 (December): 7-24.
- Geertz, Clifford, 2000, *Available Light: Anthropological Reflections on Philosophical Topics*. New Jersey: Princeton University Press.
- Merklen, D., 1991. *Asentamientos en La Matanza. La terquedad de lo nuestro* Buenos Aires: Catálogos.
- Murmis, M. y S. Feldman, 1996, "De seguir así", en Luis Beccaria y Néstor López (ed.) *Sin trabajo. Las características del desempleo y sus efectos en la sociedad argentina*. Buenos Aires: Losada
- O'Donnell,Guillermo, 1996, "Illusions About Consolidation". *Journal of Democracy* 7, no. 2: 34-51.
- _____ 1998, *Contrapuntos*. Buenos Aires: Paidós.
- Rock, David, 1972, "Machine Politics in Buenos Aires and the Argentine Radical Party, 1912-1930". *Journal of Latin American Studies* 4, no. 2: 233-56
- _____ 1975, *Politics in Argentina: the Rise and Fall of Radicalism, 1890-1930*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Rodríguez Larreta et al., 2000, *Descentralización de políticas sociales. Segundo informe de avance*. Buenos Aires.
- Rothen, D., 2000, *Global-local conditions of Possibility: the case of Education Decentralization in Argentina*. Ph.D. dissertation, Department of Education, Stanford University.
- Sánchez, Pilar, 1997, *El Cutralcazo. La Pueblada De Cutral-Co y Plaza Huincul*. Buenos Aires: Cuadernos de Editorial Ágora.
- Schuster, Federico, 1999, *La protesta social en la Argentina democrática: balance y perspectivas de una forma de acción política*. Buenos Aires (mimeo).
- Scribano, Adrian, 1999, "Argentina 'Cortada': Cortes de ruta y visibilidad social en el contexto del ajuste." En Margarita López Maya (ed.) *América Latina en los Años del ajuste*. Venezuela: Nueva Sociedad, pp. 45-72.
- Snow, David E. y Robert Benford, 1988, "Ideology, frame resonance, and participant mobilization." En Bert Klandermans, Hanspeter Kriesi y Sidney Tarrow (ed.) *From Structure to Action: Comparing Social Movement Research*. International Social Movement Research, Vol.1. Greenwich, Conn: JAI Press, pp. 197-217.
- _____ 1992, "Master Frames and Cycles of Protest," En Aldon Morris y Carol McClurg (ed.) *Frontiers in Social Movement Theory*. New Haven: Yale University Press, pp. 133-155.
- Tarrow, Sidney, 1996, "The People's Two Rhythms: Charles Tilly and the Study of Contentious Politics," *Comparative Studies in Society and History*: 586-600.
- _____ 1998 *Power in Movement. Social Movements and Contentious Politics*, New York: Cambridge University Press.
- Tilly, Charles, 1986, *The Contentious French*. Cambridge, Mass: Harvard University Press.
- _____ 1992, "How to Detect, Describe, and Explain Repertoires of Contention". *The Working Paper Series* 150.
- _____ 1995, "Contentious Repertoires in Great Britain," en Mark Traugott (ed.) *Repertoires and Cycles of Collective Action*. Durham, NC: Duke University Press.
- _____ 1997, "Parliamentarization of Popular Contention in Great Britain, 1758-1834", *Theory and Society* 26: 245-73.